



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	367
Radicado	052663103001-2020-00208-00
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	Banco BBVA
Demandado (s)	Carlos Mario Díaz Díaz
Asunto	Inadmite demanda

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO
Veinte de octubre del dos mil veinte

Sobre la anterior demanda con pretensión de ejecución del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. contra Carlos Mario Díaz Díaz, se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El Decreto Extraordinario 806 del 2020 –que fue expedido, entre otros eventos, para *“flexibilizar la atención de los usuarios del servicio de justicia”*; *“para que los procesos no se vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y garantizar el derecho a la salud de los usuarios de la justicia y de los servidores judiciales”*, implementó el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso jurisdiccional-, para lo cual estableció que se debe evitar *“exigir y cumplir formalidades presenciales o similares”* (art. 2º), por lo que dispuso, entre otras cosas, que la demanda y sus anexos, se puedan presentar en forma de mensaje de datos (art. 6).

Es de resaltar, además, que en la parte considerativa del referido decreto, se estableció: *“Este marco normativo procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender*

que las disposiciones de este decreto complementan las normas vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”.

2. El Código de Comercio, en el art. 619, define los títulos valores como aquellos “*documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora*”, concepto que pone de presente, “entre otras características, *su fuerza o función legitimadora, en virtud de la cual invisten o facultan al tenedor legítimo, es decir a quien lo posea conforme a su ley de circulación*” (art. 647 ejusdem), para que ejercite el derecho en ellos incorporado, inclusive, cuando de acuerdo con las reglas del derecho común, éste no sea el titular de los mismos, particularidad que apareja, por consiguiente, la renuncia de cualquier intento de indagación respecto de la propiedad del derecho”¹.

Según este estatuto, en los títulos valores el derecho se incorpora en el documento mismo², por lo cual, ante la falta de pago, el tenedor legítimo puede acudir “al procedimiento ejecutivo” (art. 793 del C. de Co.), obviamente debiendo aportar el documento original, pues es el único que lo legitima para demandar³.

Sobre la necesidad de la aportación del título valor original, así se ha pronunciado la jurisprudencia:

¹ Sentencia del 14 de junio del 2000, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

² “Lo primero que vemos en un títulovalor es el documento mismo, su materialidad. También el propio nombre empieza por “título”, primer elemento del neologismo compuesto “títulovalor”. Por esto iniciamos su estudio por esta característica, por la unión al papel, al instrumento, al documento, a la materia que lo expresa” (...) El derecho literal nace de la incorporación (...) Incorporar. Entrar en el cuerpo. Hacerse cuerpo en algo. Cuando un documento es prueba de un derecho, es un testimonio escrito de él, una certificación, tal vez la expresión o la imagen del derecho. Pero no es el derecho. El derecho que prueba el documento no se hace parte del documento. Este lo refleja, pero no está el derecho en él. El derecho subsiste separadamente. No se incorpora. En cambio el títulovalor es necesario para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Hay pues, un derecho distinto del de la relación fundamental, del acto o contrato en que se origina” (Sanín Echeverri, Eugenio. Títulos Valores, quinta edición, págs. 21 y 26).

³ “Cuando la ley requiere el original, como ocurre en la ejecución fundada en títulos valores, expresamente lo reclama” (Ramírez Gómez, José Fernando. La prueba documental, Señal Editora, Octava Edición, 2008, pág. 324).

“En virtud del principio de la autonomía, el derecho literal que contiene el título valor, se confunde con el mismo documento. Darle la dicha calidad a un documento que es incuestionable, solamente una copia, conlleva el riesgo de que el derecho cartular sea ejercido dos veces. Es decir, puede duplicarse el derecho y constituirse dos obligaciones independientes, una en el documento original y otra en la copia del mismo.

Solamente el documento original puede llevar inherente en él, el derecho literal que trata de ejercitarse, para que pueda predicarse que reúne las condiciones establecidas en el art. 619 del Código de Comercio”⁴.

Es que -como lo reconoce la jurisprudencia-, “los principios rectores de la literalidad, incorporación, autonomía y legitimación que informan el derecho cartular, confieren al tenedor de un título valor garantías indispensables en orden al afianzamiento de su circulación, reclamada por la expansión del comercio y al propio tiempo por la seguridad que debe gobernar la actividad cambiaria”⁵.

3. En esa medida, entonces, no obstante que las medidas adoptadas en el mencionado decreto presidencial, tendientes a “facilitar y agilizar el acceso a la justicia ... evitando exigir y cumplir formalidades presenciales”, permiten que la demanda y sus anexos se puedan presentar en forma electrónica, se tiene que, tratándose de demandas ejecutivas, donde el soporte de la ejecución sean títulos valores no electrónicos o desmaterializados, no resulta aplicable dicha norma, porque aceptarlo así, sería desconocer de tajo la normatividad comercial, la cual está permeada , como se anotó, de toda esa principialística que los inspira. La característica “principal de los títulos valores es que ellos están destinados a circular como sustitutos de lo que

⁴ Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 26 de enero de 1992. Extracto en la obra Código General del Proceso, de Editorial Legis, a continuación del art. 488.

⁵ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 19 de abril de 1993.

representan (dinero, mercaderías o posibilidad de participación en la gestión de una sociedad) en forma muy simple, sin las trabas de la cesión de créditos o de los contratos”⁶.

4. La exigencia no es caprichosa, ni debe mirarse como formalista al extremo de un “*ritualismo exagerado*”, ni que con ella se desconozca el principio de la buena fe de los sujetos procesales, sino que, por el contrario, está fundada en el imperio de la ley, en la prevalencia del derecho sustancial, en el respeto de las formas fundamentales que deben garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

5. El permitir la ejecución sin la aportación del título valor, además de desconocer toda la parte sustancial relativa a su naturaleza, afecta en grado sumo el derecho de defensa del demandado:

5.1 Al no tener acceso al original, la posibilidad de proponer una eventual tacha de falsedad, se disminuye enormemente, pues cuando se trata de falsedades materiales, por superposición, adición, supresión, borraduras, raspaduras, tachaduras, etc., es indispensable constatarlo en el documento original mismo, lo que no podría hacer, ya que el título no está a su disposición para ser visualizado y ni siquiera del juez, pese a que ya le está corriendo el término perentorio para proponer la tacha como excepción (art. 270 del C.G.P.), el que no puede interrumpirse –o por lo menos es problemático–, con la petición que eventualmente haga el ejecutado de que se requiera al demandante para que lo aporte.

5.2 El art. 116, num. 3º, del C.G. del P. establece que en “*todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por el deudor, el documento contentivo de la obligación sólo podrá desglosarse a petición suya, a quien se*

⁶ Rengifo, Ramiro. La letra de cambio, el cheque, el pagaré, los bonos, las acciones, Colección Pequeño Foro, quinta edición, pág. 6.

entregará con constancia de cancelación” ¿Cómo puede garantizar este derecho el juez, si no lo tiene en su poder?

5.3 Puede facilitar la ejecución simultánea con base en un mismo título valor, con los innumerables problemas que esto puede ocasionar, lo que no quiere decir que se esté presumiendo la mala fe del acreedor o de su apoderado judicial, sino que el documento puede extraviarse o ser robado y presentado posteriormente al cobro judicial, pese a que ya se esté adelantado una ejecución con base en una reproducción digital⁷.

6. Así las cosas, como el decreto en mención no es derogatorio de la legislación vigente, se declarará inadmisile la demanda para que la parte demandante, en el término de cinco (5) días, allegue el título valor original soporte de la ejecución, lo cual puede hacer comunicándose por los canales dispuesto por este Despacho para la autorización, excepcional, de realizar un acto procesal de manera presencial.

Por lo expuesto, el Juzgado

R E S U E L V E:

PRIMERO: Declarar inadmisile la demanda, para que dentro del término de cinco (5) días, se dé cumplimiento a los requisitos exigidos.

SEGUNDO: Reconocer al Doctor Luis Fernando Rivas Puerta, como apoderado judicial de la entidad demandante.

⁷ Este es otro argumento, pero desde lo sustancial, para afirmar que se necesita el título valor original, porque, amparado por este decreto, un acreedor que haya perdido el documento y tenga una copia de él, simplemente la escanea y presenta la demanda ejecutiva sin acudir al trámite de cancelación y reposición previsto en el art. 398 del C.G. del P., lo que generaría una total inseguridad jurídica, cuestión que no puede patrocinar o avalar la jurisdicción.

NOTIFÍQUESE

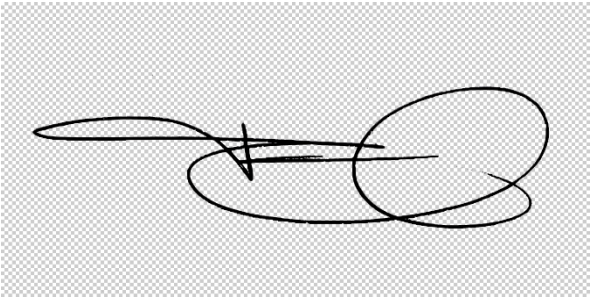


GERMÁN ALONSO FLOREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado
No. __084_ fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las
8 am

Envigado, octubre 28 de 2020



Tatiana Corrales Ramírez
Secretario